

EDITORIAL

La equidad educativa: un reto permanente

Durante la década de los sesenta, la mayoría de las investigaciones que se realizaron en América Latina en torno a la distribución de oportunidades escolares se orientaron a analizar los problemas que existían en relación con la satisfacción de la demanda de educación básica. Se confiaba, entonces, en que una expansión generalizada de los sistemas educativos contribuiría a promover el desarrollo económico, la integración de los estados nacionales, la movilidad social y una distribución más equitativa de los ingresos. Por eso los investigadores nos esforzamos en difundir los resultados de los análisis que revelaban esos rezagos.

Ahora se observa que el 93.3% de los niños que residen en la región latinoamericana y del Caribe pueden inscribirse en las escuelas primarias, antes de cumplir los diez años de edad. Sin embargo, siguen siendo preocupantes las pautas conforme a las cuales se distribuyen las oportunidades escolares que se han generado en la región, a lo largo de estas décadas. Entre otras cosas, se sabe que los niños inscritos en los sistemas educativos latinoamericanos sólo aprueban, en promedio, 4.7 grados escolares; y que esos sistemas sólo pueden retener el 45.2% de sus alumnos, cuando éstos alcanzan los 15 años de edad.

Estos resultados están asociados con diversos fenómenos (como la exclusión escolar, la reprobación, la repetición de cursos y la

deserción) que no se distribuyen en forma aleatoria entre los diversos estratos sociales, ni entre las zonas urbanas y las rurales de nuestros países. Se ha podido comprobar que los alumnos cuyos padres disfrutaban de niveles educativos y ocupacionales elevados, obtienen mejores puntajes en las pruebas que miden la comprensión de lenguajes y símbolos, la aplicación de conocimientos, y el desarrollo de otras habilidades intelectuales. También se ha observado que los alumnos inscritos en escuelas ubicadas en las ciudades económicamente avanzadas superan en el desarrollo de esas habilidades a los estudiantes que radican en localidades más pobres. Estos problemas son importantes, sobre todo por los efectos de la desigual distribución de las oportunidades que tenemos los habitantes de los países latinoamericanos y del Caribe para disfrutar de una vida digna.

Ahora bien, el haber constatado que las condiciones socioeconómicas de los alumnos y su desempeño educativo están relacionados sistemáticamente, contribuyó a generar entre algunos investigadores y planificadores de la educación diversas actitudes de desánimo. Durante varios años se creyó que era muy poco lo que los administradores de los sistemas escolares podían hacer para elevar la calidad de la educación que reciben los sectores menos favorecidos de la sociedad. Ello significaba —nada menos— que era muy limitado el poder de la educación para contribuir a revertir el círculo vicioso de la pobreza.

Afortunadamente fuimos encontrando diferentes caminos que nos permitieron recuperar la esperanza. A ello contribuyó que se hayan empezado a aplicar modelos analíticos que no se limitaron a detectar las correlaciones existentes entre los insumos y los productos de los sistemas educativos, sino que analizaron dinámicamente los procesos que se desarrollan en el interior de esos sistemas. Así pudimos comprobar, por ejemplo, que los fracasos escolares están determinados por diversas situaciones de atraso educativo, y que estos atrasos no sólo están determinados por un conjunto de factores exógenos a los sistemas escolares, sino que también lo están por diferentes procesos que se desarrollan en el interior de esos sistemas.

Al mismo tiempo que difundíamos la información sobre el papel que desempeñan los sistemas educativos en la determinación de los fracasos escolares, se fueron multiplicando los estudios basados en otros paradigmas, que contribuyeron a esclarecer, cada vez con mayor nitidez, el funcionamiento de dichos sistemas. Ello favoreció el desarrollo de diversas teorías, entre las que sobresalen —por su poder explicativo— las que han combinado los conocimientos aportados por las ciencias sociales y por la pedagogía.

Algunas de esas teorías atribuyen el rezago educativo a la aplicación de modelos de acción pedagógica que, por su excesiva rigidez, no han permitido alcanzar los objetivos hacia los cuales se orientan los planes de desarrollo educativo de la región. Ello significa que se ha intentado eliminar las diferencias económicas, sociales y culturales existentes en nuestros países, por medio de la instrumentación de sistemas pedagógicos que, por su uniformidad, no pueden responder a los requerimientos de las diferentes subculturas existentes en la región. En los hechos esto se ha traducido en una desigual distribución de oportunidades educativas, ya que se ha violado el principio de que no se debe dar un trato uniforme a quienes son profundamente desiguales entre sí.

El mayor reto que ahora enfrentamos consiste, pues, en revertir estas tendencias, por lo que las teorías que se han venido desarrollando para explicar el rezago educativo deben convertirse gradualmente en tecnologías y procedimientos que permitan difundir prácticas pedagógicas validadas por la investigación científica.

Debemos, pues, asumir el compromiso de contribuir a diseñar estrategias que puedan ser instrumentadas eficazmente en escuelas y comunidades específicas. Por tanto, la investigación educativa todavía tiene por delante la tarea de esclarecer los múltiples factores y procesos que intervienen en lo que se ha llamado la construcción institucional de la innovación.

Sin embargo, no podemos esperar que los cambios deseables sean difundidos en forma espontánea. Ni siquiera lo serán si sólo intentamos difundirlos mediante sistemas convencionales

de entrenamiento y perfeccionamiento docentes. Es indudable que las prácticas de los docentes sólo se acercarán a las pautas deseables si contribuimos a diseñar un conjunto de políticas sistemáticamente articuladas entre sí, y si éstas son implantadas a partir de métodos verdaderamente eficaces.

Si logramos diseñar e instrumentar eficazmente esas políticas, podremos esperar importantes mejorías en nuestros sistemas escolares; y, por ende, en las condiciones de vida de los integrantes de los sectores sociales que, hasta ahora, no han podido participar, en forma equitativa, de los beneficios del desarrollo económico y social de la región.